**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SALA CIVIL-FAMILIA**

Magistrada Ponente
ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

Sentencia N° 71

Proyecto aprobado mediante acta No. 77 de la fecha.
Manizales, Caldas, veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Estudiada la sustentación del recurso de alzada, acorde el traslado que en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 806 del 2020 fue corrido mediante auto del 4 de noviembre pasado, se **RESUELVE** la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por los señores Juan Pablo Ríos Martínez, Luz Enith Martínez Giraldo, José Alfredo Ríos Pérez, Manuel Antonio Martínez Gutiérrez, Olivia Giraldo de Martínez, Jesús Alfredo Ríos Martínez, Miguel Ángel Ríos Martínez y Lina Marcela López Franco, los últimos dos que actúan a nombre propio y en representación de sus hijos, los menores Guadalupe y Juan Miguel Ríos López, en contra de los señores José Marino Arias Patiño, Luis Ángel Díaz Posada, la Cooperativa de Transporte Tax La Feria y la Aseguradora Solidaria de Colombia; trámite donde la compañía de seguros funge a su vez como llamada en garantía.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda. Solicita la parte actora que mediante sentencia se declare la responsabilidad civil en cabeza de los demandados y se profiera la respectiva condena en su contra por los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante: consolidado y futuro) e inmateriales (daños morales y a la vida de relación), sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 8 de abril de 2018 donde el señor Juan Pablo Ríos Martínez resultó gravemente lesionado.

Para soportar sus pedimentos, adujo que en la data antes señalada, en la calle 29A con carrera 32A de esta ciudad, siendo las 3:50 p.m. se encontraba conduciendo de manera normal por el carril que le correspondía la motocicleta de placas ONA78E, cuando fue impactado por el vehículo de servicio público de pasajeros tipo taxi de placas STR258 afiliado a la Cooperativa Tax La Feria, de propiedad del codemandado José Marino Arias Patiño, conducido por el señor Luis Ángel Díaz Posada, quien según relata el extremo activo, se encontraba estacionado en la vía recogiendo pasajeros cuando de repente adelantó una maniobra altamente peligrosa consistente en un giro al costado izquierdo con el fin de ingresar *“hacia una vía perimetral del barrio contiguo”*, causando el evento que dejó seriamente

afectado al señor Ríos Martínez con diversas secuelas físicas de carácter permanente.

A su juicio, la imprudencia del operador del rodante radicó en no haberse percatado de las condiciones del lugar antes de virar, haber irrespetado los límites de velocidad, a más de no encender las luces direccionales, siendo su actuación totalmente sorpresiva para los demás actores viales incluyendo al codemandante.

Relata que la víctima fue trasladada de urgencia al SES Hospital de Caldas donde le realizaron sendos procedimientos quirúrgicos en su miembro inferior derecho que lo tuvieron incapacitado por un largo periodo de tiempo, durante el cual dependió totalmente de la ayuda de terceros para realizar sus actividades básicas cotidianas, no pudo regresar a la institución donde adelantaba estudios de educación secundaria y se vio privado de desarrollar su actividad laboral como vendedor de cítricos en la plaza de mercado.

La situación referida además ocasionó perjuicios morales para los familiares de la víctima directa en virtud de la tristeza que les generó ver a su hijo, hermano, nieto, tío y cuñado afrontar tan lamentables condiciones de salud.

Finalmente, indicó que para la data de los hechos el taxi estaba amparado por la Aseguradora Solidaria de Colombia, por lo que ésta, su propietario, conductor y empresa afiliadora son los llamados a responder por los menoscabos que ahora son objeto de reclamación.¹

2.2. La réplica. La acción radicada el 3 de agosto de 2020, se admitió mediante proveído datado 2 de julio de análoga calenda, se notificó a la empresa afiliadora y a la aseguradora de manera personal el 9 de septiembre de 2020, mientras que a las personas naturales accionadas por conducta concluyente según auto del 28 de octubre de tal año; todos emitieron pronunciamiento oponiéndose a los pedimentos bajo el argumento central de haber sido el señor Juan Pablo Ríos Martínez el único responsable del accidente, y formulando herramientas de defensa, acorde se describe:

2.2.1. Cooperativa de Transporte Tax La Feria: *“Culpa exclusiva de la víctima”;* *“Violación a reglamentos”;* *“Cobro de lo no debido”;* *“Prescripción”* y la *“Excepción genérica”*.

Elevó llamamiento en garantía frente a la compañía aseguradora que amparaba la responsabilidad del rodante para el momento de los hechos, Aseguradora Solidaria de Colombia.²

2.2.2. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa: respecto a la **demanda principal** deprecó la declaratoria de las excepciones llamadas: *“Culpa exclusiva de la víctima”;* *“Excesiva tasación de perjuicios”;* *“Límite de valor asegurado”;* *“Reducción del valor asegurado”;* *“Excepción genérica”;*³ y frente a su

¹ Fls. 80 a 111. Archivo 23. Cdno. Ppal. Expediente digital.

² Archivo 26. ídem

³ Archivo 28

vinculación en el **llamamiento**: *“Inexistencia de la obligación de indemnizar por ausencia de responsabilidad del conductor asegurado”; “Límite de valor asegurado”; “Reducción del valor asegurado”; “Excepción genérica”*.⁴

2.2.3. José Marino Arias Patiño y Luis Ángel Díaz Posada: Esbozaron las excepciones meritorias de *“Inexistencia de los daños alegados por los demandantes”; “Inexistencia de prueba de la responsabilidad de los demandados”; “Excepción innominada”*.⁵

2.3. Trámite procesal. Al proceso se allegaron por las partes diversos medios de convicción documentales, los interrogatorios de los involucrados, los testimonios de las personas cercanas a los gestores quienes relataron respecto a la afectación moral del núcleo familiar; también se recaudó, de oficio, el expediente contentivo de las diligencias penales que por el punible de lesiones personales se instruye frente al señor Díaz Posada en la Fiscalía Local.

2.4. La Sentencia. A través de decisión adoptada en audiencia del 27 de octubre del 2021, el Juez de primera instancia despachó de manera negativa las pretensiones imploradas al encontrar probada la excepción denominada *“culpa exclusiva de la víctima”* y condenó en costas a la parte demandante.

Para arribar a tal conclusión adujo que de los medios de prueba obrantes en el cartulario, en especial el IPAT levantado, el Informe Ejecutivo rendido por el agente policial ante el órgano persecutor y la gravedad de las lesiones evidenciadas en la humanidad de la víctima, era posible sostener que quien realizó la maniobra peligrosa fue ésta, al intentar adelantar al taxi invadiendo el carril contrario a alta velocidad *“en lugar de parar y esperar el giro del vehículo de servicio público”*, constituyéndose dicho actuar imprudente del motociclista en la fuente de los resultados dañosos cuya reparación persigue, sin que mediara la injerencia del taxista.

Discernió que si en realidad el señor Ríos Martínez hubiese estado transitando a 30 kilómetros según informó en su interrogatorio (como era necesario en el sector donde se presentó la colisión), sus heridas no hubieran revestido la trascendencia de que da cuenta el expediente e incluso, de haber atendido la distancia reglamentaria entre rodantes de que trata el artículo 108 del Código de Tránsito (10 metros en zonas de velocidad reducida), pudo haber frenado, pero no lo logró por su exceso de velocidad, verificándose así la veracidad de la hipótesis inserta en el IPAT en el sentido que desatendió las normas de circulación.

2.5. Los Reparos. No conforme con la determinación adoptada, la parte demandante la apeló aduciendo como argumentos esenciales los que a continuación se compendian:

(i) El daño padecido por el lesionado directo y sus familiares está plenamente acreditado con los medios suasorios allegados, tanto los informes forenses del

⁴ Archivo 41. C01 Principal. Expediente Sharepoint.

⁵ Archivo 30. Ibidem

Instituto Nacional de Medicina Legal, como las testimoniales que denotan la naturaleza de los menoscabos generados y la existencia de la actividad comercial a la que previo al suceso se dedicaba el señor Juan Pablo, por lo cual no se comprenden las razones que condujeron al judicial a imponer una condena en costas en la cuantía determinada, siendo necesaria su revocatoria en esta sede.

(ii) El sentenciador primario omitió aplicar la presunción de culpa (misma que es de derecho) a favor de la víctima que incorpora el canon 2356 de la codificación sustancial y que relevaba a la parte demandante de acreditar tal elemento, trasladándose la carga de la prueba en cabeza de las accionadas quienes omitieron establecer la culpa exclusiva de la víctima como eximente de la responsabilidad del taxista.

Reiteraron que el señor Díaz Posada se encontraba en desarrollo de la actividad peligrosa en la cual adelantó una maniobra de alto riesgo girando a su izquierda, en una vía concurrida sin tomar las precauciones del caso, por lo que su conducta en la materialización del resultado dañoso no podía descartarse de plano, menos en razón de su interrogatorio de parte cuyo propósito no es beneficiar a quien lo rinde, sino provocar su confesión.

(iii) No era dable atender al contenido del Informe de Accidente de Tránsito para reprochar al motociclista en la medida que quien lo confeccionó no compareció a ratificarlo, ni obran elementos adicionales que permitan entender que las actuaciones de Juan Pablo fueron eficientes y determinantes en la generación del siniestro, estando por el contrario sentado que el vehículo de transporte de pasajeros quedó atravesado en la calzada y sus daños se dieron en la puerta lateral izquierda *“no en la punta”*.⁶

2.6. La réplica. Pese a que en el asunto el traslado del recurso se surtió debidamente mediante lista fijada en Secretaría el 22 de noviembre de 2021, los no recurrentes omitieron pronunciarse para defender el fallo en su favor.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema Jurídico

Encontrando que los presupuestos procesales están reunidos, que no se observa causal de nulidad o irregularidad alguna que obligue a retrotraer lo actuado a etapa anterior, corresponde a la Sala, con el límite impuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y atendiendo a los reproches elevados por la parte opugnante contra la providencia de primer nivel, determinar si con el material probatorio arribado al dossier se acreditó el medio exceptivo alegado por los demandados consistente en la culpa exclusiva de la víctima como concluyó el *a-quo* o si por el contrario, conforme lo sostiene la divergente, incurrió el judicial en indebida valoración de los elementos de convicción e inaplicación de la normativa sustancial que regulaba el debate.

⁶ Archivo 04. Cdno. 02SegundaInstancia. Expediente digital.

3.2. Tesis de la Sala

La Corporación confirmará en su totalidad la determinación recurrida, teniendo en cuenta que los medios demostrativos recaudados en el plenario, avalan con un mayor grado de probabilidad los supuestos fácticos en que se fundamentaron las excepciones de fondo propuestas por los integrantes del extremo demandado, sin que así pueda afirmarse respecto a la parte actora, cuya inactividad probatoria impide desvirtuar el contenido del informe de accidente de tránsito confeccionado por la autoridad en la materia.

3.3. Supuestos jurídicos

3.3.1. En términos generales, podría definirse la responsabilidad civil como la obligación que le asiste a las personas de indemnizar los daños que con sus conductas -activas u omisivas-, las desplegadas por sus dependientes o con los elementos en su custodia, se les cause a terceros que no se encuentran en deber jurídico de soportarlos. La función principal de tal concepto es la reparación de la víctima, reconociendo que la fuente de tal responsabilidad puede provenir de la conducta asumida en el marco de una relación comercial preexistente entre los sujetos como es la- *responsabilidad contractual*- o sin mediar aquel vínculo, la originada en un hecho jurídico con repercusión civil - *responsabilidad aquiliana o extracontractual*-.

En punto del régimen que para el caso en estudio interesa, previsto por los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, se tiene que la responsabilidad puede surgir de los perjuicios seguidos del daño ocasionado por hechos jurídicos con los que se comprometen los derechos de las víctimas. Sucesos de tipo delictuoso bien sea por la intención positiva de inferir el menoscabo, o culposos por la omisión o incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

Así, como elementos estructurales para la declaratoria de responsabilidad civil que se viene hablando, se erigen: **a)** el daño cierto entendido como el menoscabo en el patrimonio de la parte afectada a raíz de la conducta o hecho del agente **b)** la culpa derivada de la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la normativa establecida por parte del sujeto a quien se atribuye la responsabilidad, y; **c)** el vínculo causal entre este y aquella.

3.3.2. En lo que corresponde al ejercicio de actividades peligrosas, en este caso la conducción de vehículos, donde la imputación es de culpa presunta, la Corte Suprema de Justicia y en desarrollo de lo establecido en el art. 2356 del Código Civil tiene decantado que “...*la responsabilidad se juzga al abrigo de la “(...) presunción de culpabilidad (...).”Cualquier exoneración, por tanto, debe plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un elemento extraño (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima)”* a ello se alude en la sentencia (SC12994-2016).

Enmarcada la responsabilidad en el ejercicio de este tipo de actividad, a la víctima le corresponde acreditar el daño y el nexo causal y al demandado le incumbe para exonerarse, demostrar la ocurrencia de un elemento extraño en la causación del

mismo, pues en principio conforme al artículo 2356 del Código Civil opera a favor de la víctima y respecto del agente una presunción de culpa.

Ahora bien, en las hipótesis en las que los sujetos involucrados (agente y víctima) al momento del acaecimiento del hecho dañoso se encontraban en ejercicio de la misma actividad peligrosa, no ha sido pacífica la doctrina y la jurisprudencia ha realizado construcciones conceptuales de diversa naturaleza que con el tiempo han evolucionado.⁷

Respecto a la colisión de actividades peligrosas equivalentes, finalmente ha sostenido la Corte como ineludible que el operador judicial en cada caso, con el material probatorio puesto a su consideración, examine la conducta de los involucrados a fin de establecer su grado de participación en la configuración del desenlace dañoso: *“(...) la doctrina jurisprudencial cambió señalando en reiteradas oportunidades que en presencia de dos actividades peligrosas (...) en lugar de colegir maquinamente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. (...) siendo éste el criterio mantenido hasta la fecha. (...)”*⁸

A manera de conclusión puede afirmarse que se trata entonces de un régimen específico y especial de responsabilidad civil, en el que se encuentra obligado el judicial a evaluar el grado de incidencia del actuar de las partes en la consecuencia nociva: *“(...) el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, **precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto**, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)”*⁹.

Sin perjuicio de lo dicho, la responsabilidad aplicable en los términos antes señalados no impide que la parte demandante acredite que en cabeza del demandado concurrieron los elementos que lo hacen deudor de las indemnizaciones pertinentes. En tal sentido sentenció la Corporación de cierre de nuestra jurisdicción: *“(...) La concurrencia de las dos actividades peligrosas en la producción del hecho dañoso y el perjuicio, en nada obsta para que la parte*

⁷ *“(...) planteó la compensación de “culpas” sin atender el grado de participación del agente y la víctima (Sentencia de 29 de marzo de 1962, XCVII, 739); la absorción de la actividad más peligrosa respecto de la que no lo es tanto, donde la prevalente o mayor absorbe la menor (30 de abril de 1976; 25 de octubre de 1994, exp. 3000, 22 de febrero de 1995); la paridad (1° de marzo de 1954, LXXXVII, 57) entre una u otra, aplicándose la equidad (julio 17 de 1985), su compensación o reducción de acuerdo con el grado de las culpas (27 de febrero de 1987, 21 de abril de 1991) (...) incluso, la aplicación del artículo 2341 del Código Civil, pasándose de una concepción absoluta a una relativa, para finalmente postular la ausencia de la neutralización.(...)”* Sentencia del 24 de agosto del 2009 M.P. William Namen Vargas

⁸ CSJ. Civil. Sentencia del 24 de agosto del 2009 M.P. William Namen Vargas

⁹ CSJ. Civil. Sentencia SC2107 de 12 de junio de 2018.

demandante, acudiendo a las reglas generales previstas en el artículo 2341 del Código Civil, pruebe la culpa del demandado (...)" (Sentencia SC5885-2016)

3.3.3. En punto de la indebida valoración de los medios de prueba, aquella se presenta cuando el funcionario judicial se aparta abiertamente de lo que ellos arrojan para adoptar la decisión a su arbitrio en contravía de la evidencia, así como en las hipótesis en que el fallador sustenta su sentencia en pruebas recaudadas de manera ilícita y no da mérito a las legalmente aportadas al plenario. Una acusación en tal sentido, exige por parte de quien la eleva la demostración plena para hacer ver que las deducciones del Juzgador son antojadizas, ilógicas, caprichosas y que no guardan relación alguna con los medios de convicción.

3.3.4. Dentro de las pruebas en este tipo de debates de responsabilidad se encuentra el informe de accidente de tránsito, que corresponde al documento elaborado por la autoridad en dicha materia respecto a las circunstancias que rodearon el suceso. En este se consigna la descripción de aspectos generales tales como el lugar, la fecha y hora, los vehículos involucrados, su ubicación final, la identidad de sus conductores, ocupantes, el estado de la vía y las posibles causas de ocurrencia del siniestro, entre otros.

Al tratarse de un instrumento confeccionado por una autoridad pública goza de presunción de autenticidad respecto a su otorgamiento y su data, mientras que frente a su contenido material, ha conceptualizado la Corte Constitucional que es susceptible de ser desvirtuado, amén que debe analizarse por el funcionario a quien se le ponga a consideración partiendo de las reglas de la lógica, la sana crítica y el conjunto con los demás elementos suasorios para asignarle el valor probatorio correspondiente a efectos de establecer la realidad y veracidad de los hechos. (Sentencia C-429 de 2003)

3.4. Caso concreto

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, para la Sala deviene pertinente estudiar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad aquiliana a que se hizo referencia en el anterior acápite, especialmente el que atañe al nexo causal que, acorde con la tesis de primer nivel, sufrió ruptura en razón del actuar del codemandante Juan Pablo Ríos Martínez, frustrando así la imputación de los resultados dañosos a los demandados.

(i) En lo que atañe al **ejercicio de una actividad peligrosa**, no ofrece dubitación que tanto el señor Juan Pablo como el señor Díaz Posada se encontraban adelantándola, el primero sobre la motocicleta de placas ONA78A, mientras que el restante conducía el vehículo de transporte público de pasajeros reseñado con las placas STR258. Tales hechos fueron aducidos por la activa en el libelo introductor y aceptados por quienes conforman la pasiva en las respectivas réplicas, a la par que se desprende de las pruebas documentales allegadas, específicamente del informe de accidente de tránsito en que se consignó la descripción de los vehículos involucrados y las diligencias penales aportadas por la Fiscalía Tercera Local de la ciudad.

(ii) Referente al **daño** surge del dossier que se contrae a las afectaciones en la humanidad del señor Ríos Martínez, que según el último reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses elaborado el 11 de septiembre de 2020, consistieron en deformidades físicas, perturbaciones funcionales en el órgano de la locomoción y en el miembro inferior derecho, todas de carácter permanente que condujeron además a dictaminar una incapacidad definitiva de 140 días. Dicha situación afectó no sólo a quien padeció las lesiones, sino también a su núcleo familiar cercano que se vio abocado a enfrentar las aflicciones propias de ver a su ser querido limitado durante el largo periodo de su recuperación para continuar en condiciones de normalidad su vida, de acuerdo a lo informado en las testimoniales y por ellos en los interrogatorios.

De cara a que el inicial reparo del vocero judicial de la activa reposa sobre este ítem, en tanto a su juicio al verse acreditados los menoscabos mediante los referidos elementos de convicción, no había lugar a emitir una condena en costas en el monto señalado por la célula judicial de origen, delantamente se anuncia que no es este el escenario previsto por el ordenamiento adjetivo a fin de discutir lo referente a dicho aspecto; ello atendiendo a lo sentado por el precepto 366 numeral 5 del Código General del Proceso bajo el entendido que: ***“La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas (...)”***.

Con base en la normativa trascrita, aflora patente que la Corporación, en la precisa etapa procesal que aquí despacha, se halla vedada de pronunciarse respecto a la cuantía de las agencias en derecho fijadas en el fallo confutado, traduciéndose ello en el fracaso del reproche descrito al ser la alzada frente a la sentencia impertinente al propósito perseguido por la censura.

(iii) En cuanto al **nexo de causalidad** entre los elementos aludidos, se tiene, tal como lo expuso el Funcionario, que el accidente fue originado por la inobservancia de la normativa de tránsito y el presunto exceso de velocidad por parte del motorista, de lo que dan cuenta las lesiones en su cuerpo y el hecho de que si hubiera estado circulando al ritmo que informó, con la distancia reglamentaria respecto al taxi, podría haber frenado a objeto de conjurar la colisión; su tesis la apoyó en el contenido del IPAT, los lugares donde se presentaron los golpes en ambos vehículos y lo relatado en el informe ejecutivo rendido por el sub intendente de policía ante la Fiscalía, de los que derivó la desobediencia de los artículos 68, 106 y 108 de la Ley 769 de 2002 en cabeza del señor Ríos Martínez.

La censura mostró desacuerdo con las inferencias del *a-quo* pues en su sentir dejó de aplicarse la presunción de culpa que a favor de la víctima establece el artículo 2356 del Código Civil, sin ser dable acoger las aseveraciones del policial dado que no compareció a ilustrar los documentos que suscribió o a ratificar su contenido, a la par que sin fundamentos técnicos se dio por cierto el exceso de velocidad del señor Juan Pablo descartando de plano la intervención del taxista y el hecho de que los golpes del rodante de servicio público se hallan en la puerta izquierda ***“no en la punta”*** lo que demuestra que estaba atravesado en la vía.

En diferentes términos, el reproche propuesto a la providencia se funda de manera esencial en que el juzgador apreció de forma errónea las pruebas e inaplicó los parámetros de derecho que reglan el ejercicio de las actividades peligrosas, llevándolo tales desatinos a concluir que en el caso concreto se presentó la culpa exclusiva del motociclista como elemento eximente de la responsabilidad de los encartados.

Puestas así las cosas, emprenderá esta Sala el estudio del caudal suasorio allegado al dossier de cara a las versiones brindadas tanto por los demandantes, como por los demandados respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el siniestro que motivó el inicio de la presente acción indemnizatoria.

Concuerdan los extremos de la Litis en que el accidente de tránsito sucedió en la carrera 32A con calle 29A de esta ciudad el día 8 de abril del 2018, cuando el señor Juan Pablo Ríos Martínez se movilizaba en su motocicleta y el señor Luis Ángel Díaz Posada operaba el carro de servicio individual de transporte de pasajeros, ambos sobre el carril derecho en sentido hacia el centro.

Acorde la teoría sostenida por el motociclista en la demanda, el taxi se hallaba estacionado recogiendo un servicio y de manera sorpresiva, sin activar las señales visuales pertinentes, viró su rumbo con dirección a la izquierda a fines de acceder al barrio contiguo por la calle 29A, versión que confirmó en la denuncia penal interpuesta en el mes de julio del 2018¹⁰ al igual que en la entrevista brindada a la policía judicial el 5 de febrero de 2019¹¹, con la única diferencia que ya no aludió a la intención de seguir para el barrio contiguo, sino que lo pretendido por el señor Díaz Posada era hacer un giro en “U”. Ya en el interrogatorio de parte practicado por el Juzgado cognoscente indicó que su deseo era sobrepasar el rodante por el costado izquierdo, al igual que lo hicieron otros carros que le antecederon, siendo en ese acto impactado por el taxista¹²; la velocidad que llevaba era la permitida en la zona, es decir, unos 30 kilómetros por hora.

Por su parte, el conductor del carro transportador adujo en la declaración rendida, que previo a disponerse a girar a su izquierda para entrar al barrio Cervantes donde lo esperaban unos pasajeros, redujo su marcha y activó las luces direccionales; que tan solo advirtió la presencia del velocípedo con el golpe al taxi que lo dejó aturdido e incluso llegó a pensar que le había sido lanzado un elemento contundente hasta que vio a las personas corriendo a socorrer al lesionado.¹³

¹⁰ “(...) Al momento que me disponía a pasar por el lado de él, el conductor del taxi emprendió la marcha haciendo el giro hacia el lado izquierdo a meterse a una de las calles, lo que provocó que yo impactara la moto contra el taxi”

¹¹ “Lo poco que recuerdo es que el taxista estaba parqueado y los carros le pasaban por un lado, yo giré en la moto y hasta ahí me acuerdo (...) él estaba estacionado y cuando yo iba a girar él hizo un giro en U”

¹² “**P.** Cuando usted llegó a donde él se encontraba, usted lo estaba adelantando cuando usted hizo el giro **R.** Él estaba arrinconado en el carril, daba espacio a seguir la marcha inclusive varios carros estaban dando siguiendo la marcha común y corriente cuando yo voy a seguir Pues por mi carril fue que el giro a mano izquierda **P.** Entre la moto que usted conducía y el taxi A qué se refiere este proceso O sea de la parte demandada existían otros vehículos entre usted y ese taxi había otros vehículos o no había más vehículos **R.** sí señor, había unos vehículos que lo estaban adelantando, estaban pasando pues por el carril.”

¹³ “(...) antes de llegar a la calle 29a para hacer el giro a la izquierda reduje la velocidad para alertar a los vehículos que venían en la periferia para poder hacer el giro a la izquierda obviamente colocando con antelación la direccional, al efectuar el giro por la respectiva calle. En cuestión de segundos sentí un fuerte impacto por el lado izquierdo que en ese momento me dejó aturdido totalmente, al levantar la cabeza pues

La tesis en torno a los supuestos fácticos del siniestro con que se fundamentó la defensa de los encartados, consistió en que el informe de accidente confeccionado por el agente Germán Darío Quintero González, atribuyó la hipótesis de su causa al vehículo del motorista en razón de haber inobservado las señales o normas de tránsito terrestre, en especial la prohibición de que trata el artículo 73 de la codificación respectiva en el sentido de no realizar maniobras de adelantamiento en intersecciones, como resultaba ser la ubicada en el sector donde acaecieron los hechos, debiendo concluirse entonces que la transgresión se dio en cabeza del señor Juan Pablo Ríos Martínez.

Sentados los hechos a verificar, anuncia este Cuerpo Colegiado que atendiendo al dicho de la víctima en las distintas versiones que rindió tanto ante el cuerpo fiscal, como frente a los interrogantes del Juzgado primario, adicionados a los demás insumos de convicción, se comprueba la certeza de la hipótesis plasmada en el IPAT, por ende, la tesis de los codemandados al edificar la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

En efecto, de las afirmaciones del codemandante (que se tendrán como confesión), de la ilustración adjunta al informe de accidente de tránsito, a la par del registro fotográfico tomado en tal fecha por el agente y el elaborado en desarrollo de la inspección del lugar donde se presentó el suceso, adelantada por la policía judicial dentro del programa metodológico, no otra deducción podría construirse, en la medida que su análisis permite entrever de manera principal que el punto donde el señor Ríos Martínez intentó rebasar al taxi correspondía a uno de los expresamente proscritos por los preceptos de circulación, lo que tuvo incidencia directa y si se quiere única en el desenlace dañoso.

Define el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 el croquis como un plano descriptivo contentivo de los pormenores de un accidente de tránsito levantado en el sitio de los hechos por la autoridad competente; en este caso dicho instrumento fue diagramado por el subintendente Quintero González en zona residencial del municipio, donde dejó constancia que se trataba de una vía recta, plana, calzada de doble sentido, dos carriles en concreto cuyo estado era bueno, carretera seca, sin iluminación artificial al tiempo del evento ya que era de día. Tras realizar la respectiva medición indicó que la carrera 32A tiene un ancho de 7,05 metros, que la trayectoria de la motocicleta fue en línea recta en medio de los carriles, mientras que el taxi estando en su calzada derecha, giraba a la izquierda para ingresar a la calle 29A.

La hipótesis del evento se codificó bajo el número 112, consistente según la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte en “*Desobedecer señales o normas de tránsito*” descrita en el mismo acto administrativo como “*No acatar las indicaciones de las señales existentes en el momento del accidente. No confundir con carencia de señales. O no respetar en general, las normas descritas en la ley*”, atribuida al velocípedo del lesionado, sin que ella fuera desvirtuada con las pruebas aportadas por el apoderado judicial de los demandantes (quien pretende bajo el

solo alcancé a ver como vidrio dentro del carro y esquirlas y todo eso pero no alcancé a ver nada, incluso pensé que me habían tirado una piedra o algo así, cuando ya levante la cabeza vi la gente corriendo que fue que logre ver que había una moto a unos metros abajo (...)”

alero de la culpa presunta justificar su absoluta inactividad en ese aspecto) y por el contrario puede ser ratificada con las pruebas antes referidas, particularmente con la confesión del afectado en el sentido de encontrarse adelantando al taxi a pesar de la existencia de la intersección con la calle 29A que se lo prohibía.

Y es que en realidad, la ilustración acompañada al informe, aunada a las evidencias gráficas captadas mediante retratos fotográficos ese día y las posteriores de los investigadores de la Fiscalía, denotan que en la carrera por la que circulaban los vehículos involucrados se hallaba la intersección con la calle 29A, misma que se acompasa a la precisa significación traída por el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 en cuanto se trata de un *“Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran.”*, señalando el artículo 73 del compendio legislativo en cita que **“No se debe adelantar a otros vehículos (...) En intersecciones (...) En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.”** precepto que, a juzgar por la posición final de los vehículos según las pruebas aludidas, se dejó de lado por el motorista a quien le era exigible esperar detrás del taxi, dentro de su carril, hasta que el señor Díaz Posada prosiguiera, bien fuera hacia adelante para continuar en la carrera 32A o a tomar el costado izquierdo a la calle 29A, cual era su genuina intención, siendo impactado por el artefacto de dos ruedas.

Si bien el policial que produjo el informe de accidente de tránsito no brindó relato en la instancia primigenia, lo cierto es que ello no resta credibilidad a lo allí inserto, toda vez que sus aserciones se entienden cobijadas por la presunción de veracidad dada su calidad de servidor público en ejercicio de las funciones propias del cargo, en virtud de las cuales, se asume, ha sido capacitado a propósito de arribar a las inferencias correspondientes con base en la evidencia por él hallada, en aplicación de los conocimientos técnicos respectivos.

Se suma a lo dicho que el agente narró en el informe remitido a la Fiscalía haber consultado con personas que se hallaban en el sector, así plasmó: *“Al llegar allí a eso de las 16:00 horas aproximadamente se observa una motocicleta con volamiento (sic) lateral sobre la vía y un taxi atravesado, igualmente una persona tendida sobre la misma (...) al tratar de indagar qué había sucedido, varias personas que se encontraban en la escena del accidente manifestaron que **el conductor de la moto estaba adelanto (sic) el vehículo cuando este hizo un giro a la izquierda y que la motocicleta le alcanzó a pitar (...)**”*; tal evidencia, adicionada a lo manifestado por el señor Juan Pablo, permite comprender más allá de cualquier duda que se encontraba en desarrollo del adelantamiento proscrito conforme la normativa ya referenciada.

Ahora bien, el que los daños sobre el taxi se presentaran en sus puertas izquierdas *“no en la punta”* o que se encontrara atravesado en la vía, como lo encontró el agente de tránsito, ninguna diferencia hace respecto al juicio de la conducta imprudente del motociclista, en primer lugar porque la ubicación del rodante a que aluden los inconformes fue la final, donde quedó tras el choque y en segundo porque de acuerdo al golpe propinado por la motocicleta, que fue de frente mientras el taxista intentaba girar a su izquierda, lo lógico era que los estragos se dieran allí.

No menos importante es destacar que aunque no existe una prueba técnica que a ciencia cierta permita determinar la velocidad que llevaba la víctima al momento del siniestro, la deducción del judicial primario en cuanto al posible exceso no podría tildarse de descabellada, pues a partir de hechos probados construyó la inferencia lógica. Esto es, mirando la gravedad de las lesiones sufridas por Juan Pablo y las averías suscitadas en su motocicleta, que de acuerdo con la inspección realizada el 10 de abril de 2018 por el perito del órgano persecutor previo a su entrega se dieron en *“placa, direccional trasera derecha, direccional delantera izquierda, tapa trasera completa, tapa lateral derecha, tanque de combustible, cubierta lateral derecha, cubierta lateral izquierda (...) cubierta frontal, defensa delantera derecha, defensa delantera izquierda, barras de suspensión delanteras (...) rin delantero, manubrio, retrovisor derecho, base tacómetro, pedal de cambios, reposapie trasero izquierdo (...) el sistema de dirección se encuentra en malas condiciones(...)”*¹⁴, es posible pensar que distinto a lo informado en el interrogatorio por el motorista, no eran 30 kilómetros por hora, como se reglamenta en la zona, sino una muy superior.

De lo anterior también da muestra lo que revelan las reglas de la experiencia, en el sentido de que para lograr efectuar de manera exitosa maniobras de adelantamiento, necesariamente debe haber un aumento en el ritmo de marcha de quien pretende rebasar y que un conductor que transite a la velocidad indicada por el señor Ríos Martínez, se halla en plena capacidad de evitar un resultado de la magnitud lesiva del presentado en el de marras con tan solo frenar su vehículo, hecho que aquí no sucedió.

No se olvide que el canon 74 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, impone como obligación de los conductores reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora: *(...) en zonas residenciales. En las zonas escolares. (...) Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. (...) En proximidad a una intersección.”* supuestos de hecho en su totalidad concurrían al asunto por el lugar en que ocurrió la colisión y de los que el motociclista hizo caso omiso.

Así las cosas, de las probanzas arrimadas al trámite declarativo es dable extractar que la conducta del motorista jugó un papel no solo determinante sino exclusivo en la ocurrencia del fatídico evento, excluyente de los hechos que se imputaron al señor Díaz Posada en la demanda, pues fue únicamente el actuar imprudente de la víctima al pretender adelantar el taxi en lugar expresamente prohibido y la más probable alta velocidad, la causa de los daños cuya indemnización se persigue, configurándose de dicho modo el elemento extraño conocido como *“culpa exclusiva de la víctima”* que impide la formación del nexo causal entre el ejercicio de la actividad peligrosa y los perjuicios suscitados a los demandantes, ya que el afectado se expuso de forma descuidada contribuyendo eficientemente a la materialización del riesgo inherente a la actividad que estaba ejerciendo.

Conforme lo reseñado se tiene que las conclusiones esbozadas por el operador judicial de primer nivel no son desproporcionadas ni son contraevidentes de cara a la prueba que efectivamente reposa en el trámite, puesto que según los medios

¹⁴ Expediente diligencias penales. Archivo 59. Cdo. Ppal.

suasorios allegados la conducta del señor Juan Pablo originó el siniestro, aserto al que conduce el informe de tránsito cuyo contenido, se itera, no fue de ninguna manera infirmado por la censura y que analizado a la par con los demás elementos, permiten arribar a esa deducción, siendo pertinente señalar que, distinto a lo propuesto por los inconformes, la aplicación de la presunción traída por el artículo 2356 del Código Civil, no puede tomarse aisladamente para emitir la sentencia condenatoria, máxime cuando obran probanzas suficientes que respaldan la ausencia de responsabilidad en cabeza de los convocados.

Finalmente, cabe anotar en armonía con la jurisprudencia referida en el respectivo acápite, que el hecho de que a este tipo de trámites declarativos se les aplique el contenido del citado artículo del compendio sustancial, no impide que la parte interesada acredite los supuestos fácticos sobre los que funda la *causa petendi* sin que los aquí accionantes cumplieran con la carga probatoria que les correspondía.

3.5. Conclusión

Así las cosas, habiéndose verificado la existencia de la culpa exclusiva de la víctima como elemento extraño que impide la prosperidad de la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual a cargo de los encartados, tal como lo sostuvo el sentenciador de primer grado, resulta imperativo confirmar la providencia impugnada en su totalidad.

3.6. Costas

Atendiendo a la falta de pronunciamiento de los no recurrentes frente al recurso, no se advierte configurada la controversia a que alude el artículo 365 C.G.P., por lo que no hay lugar a emitir condena en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

El Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Manizales en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, Caldas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por los señores Juan Pablo Ríos Martínez, Luz Enith Martínez Giraldo, José Alfredo Ríos Pérez, Manuel Antonio Martínez Gutiérrez, Olivia Giraldo de Martínez, Jesús Alfredo Ríos Martínez, Miguel Ángel Ríos Martínez y Lina Marcela López Franco, los últimos dos que actúan a nombre propio y en representación de sus hijos, los menores Guadalupe y Juan Miguel Ríos López, en contra de los señores José Marino Arias Patiño, Luis Ángel Díaz Posada, la Cooperativa de Transporte Tax La Feria y la Aseguradora Solidaria de Colombia; trámite donde la compañía de seguros funge a su vez como llamada en garantía.

Sin **CONDENA** en costas en esta instancia por las razones expuestas.

Se dispone **DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE

Los Magistrados,

ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO JOSÉ HOOVER CARDONA MONTOYA

Firmado Por:

**Angela Maria Puerta Cardenas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 6 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

**Jose Hoover Cardona Montoya
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 5 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

**Alvaro Jose Trejos Bueno
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 9 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7f1f4654716772185452afa2952607fe751da21f506a8d4f35beafe6cd8bf9f

Documento generado en 25/03/2022 08:51:16 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente
URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**